
La colegialidad en la gestión del patrimonio eclesiástico

Collegiality in the Management of Ecclesiastical Heritage

RECIBIDO: 13 DE JUNIO DE 2013 / ACEPTADO: 3 DE SEPTIEMBRE DE 2013

Juan Ignacio ARRIETA

Secretario del Consejo Pontificio para los Textos Legislativos
Roma
jjarrieta@legtxt.va

Resumen: El trabajo analiza la posición jurídica de los oficios eclesiásticos y de los organismos que intervienen en la gestión del patrimonio eclesiástico de la diócesis, tratando de individuar y distinguir sus específicas funciones, con el objeto de ilustrar de qué manera deben actuar entre sí, con miras a una administración colegial y en comunión de dicho patrimonio en la que, al mismo tiempo, se respeten las responsabilidades que el derecho asigna singularmente a determinados oficios.

Palabras clave: Patrimonio eclesiástico, Fondo común diocesano, Consejo diocesano de asuntos económicos, Consejo parroquial de asuntos económicos, Ecónomo, Sistema benefical.

Abstract: This paper analyzes the legal status of ecclesiastical posts and bodies involved in the management of diocesan ecclesiastical heritage. The objective is to identify and distinguish between their respective functions so as to shed light on how they ought to work together; and, in turn, to frame a collegial approach and sense of communion regarding ecclesiastical heritage, without compromising the prerogatives due to particular posts and bodies under the law.

Keywords: Church Property, Ecclesiastical Heritage, Diocesan Common Fund, Diocesan Finance Council, Parochial Finance Council, Financial Administrator, Benefice System.

El Concilio Vaticano II ha extendido el criterio de la comunión a diferentes áreas de la vida y de la actividad de la Iglesia, hasta el punto que el Sínodo extraordinario de los Obispos convocado al cumplirse el XX Aniversario de la conclusión del Concilio señaló que la eclesiología de comunión había sido el concepto central de la reunión conciliar¹. El Código de Derecho Canónico fue luego el instrumento legislativo que trató de adecuar ese criterio a cada sector de la vida eclesial indicando (o sugiriendo, al menos, con los límites del lenguaje jurídico) cuál era su significado práctico: cómo se traducía la comunión en concreto y qué exigencias conllevaba en cada diversa situación. Éste es el cometido que corresponde aquí al Derecho canónico: deducir en todo lo posible las exigencias de justicia que la comunión comporta en la experiencia práctica.

También el Papa Juan Pablo II en su carta apostólica *Novo millennio ineunte* habló de la necesidad de desarrollar en la Iglesia el principio de comunión, a nivel de instituciones y de relaciones intersubjetivas. Para lograrlo, el Papa señaló que era preciso cultivar antes una espiritualidad de la comunión entre los fieles cristianos y habló de esta espiritualidad como de un “principio educativo” que debe estar presente en todos los lugares donde se plasma el hombre y el cristiano². En el funcionamiento de las instituciones de la Iglesia, esa espiritualidad de comunión representa la pieza clave de la peculiar “cultura de empresa” que las debe animar, y que postula comportamientos y actitudes determinadas con las que deben identificarse cuantos a ellas pertenecen.

Por consiguiente, aunque la disciplina canónica haga su parte por traducir las exigencias de la comunión a los diferentes ámbitos institucionales de la Iglesia y deba seguir perfeccionando instrumentos y técnicas para determinar posiciones jurídicas de derecho y deber, la cultura de comunión que ese concepto postula requiere, antes que nada, progreso en el campo de las actitudes personales y del trabajo en común. Tratándose, como decía el Papa, de un “principio educativo”, exige principalmente aprendizaje y cambio personal.

¹ «*Ecclesiologia communionis idea centralis ac fundamentalis in documentis concilii est*» (Synodus Episcoporum, Relatio finalis Ecclesia sub verbo Dei mysteria Christi celebrans pro salute mundi, 7 diciembre 1985, C. 1, L'Osservatore Romano, 10 diciembre 1985, 6-7).

² «Antes de programar iniciativas concretas, hace falta *promover una espiritualidad de la comunión*, proponiéndola como principio educativo en todos los lugares donde se forma el hombre y el cristiano, donde se educan los ministros del altar, las personas consagradas y los agentes pastorales, donde se construyen las familias y las comunidades» (JUAN PABLO II, Carta ap. *Novo millennio ineunte*, del 6 de enero de 2001, n. 43, AAS 93 [2001] 266-309).

En el ámbito del concepto de comunión³ se mueve también el criterio de gobierno colegial⁴: es una forma de gobierno en comunión con manifestaciones diversas según el contexto al que se aplique y según la presencia de normas positivas –de Estatutos, Reglamentos, etc.– que establecen situaciones de derecho y dicen cómo ha de vivirse concretamente esa forma de comunión que es el gobierno colegial en cada institución o en una situación determinada. En estos casos, respetar las normas establecidas es observar la comunión y, en su caso, la colegialidad.

La colegialidad no implica lo mismo, por tanto, en el turno de jueces de la Rota⁵, en la reunión de un Cabildo catedral, o cuando el concepto se aplica al Colegio de los Obispos y al gobierno en comunión de un Pastor diocesano o incluso del Romano Pontífice. No es un concepto unívoco, como recordó en su momento la *Nota praevia* a la *Lumen gentium*⁶.

En esta ocasión hemos de tratar del gobierno en comunión en la administración patrimonial de la Iglesia, en la gestión de los bienes eclesiásticos que pertenecen a las personas jurídicas canónicas públicas⁷. Quienes tienen confiada esa tarea deben actuar en comunión y aquí procuraremos reflexionar acerca de algunas exigencias de esa forma de gestión.

Como decía hace unos meses el Cardenal Prefecto presentando los nuevos Estatutos de la Prefectura de Asuntos Económicos de la Santa Sede, «la tarea de quienes administran bienes temporales de la Iglesia para encauzarlos hacia su finalidad espiritual corresponde a la misión de la Iglesia», y aun teniendo «un objetivo diverso, tiene que adecuarse al mundo real (económico y financiero) que posee reglas propias y que no siempre se ajustan a las finalidades religiosas»⁸.

³ Cfr. M. SEMERARO, «Communio», en J. OTADUY - A. VIANA - J. SEDANO (eds.), *Diccionario General de Derecho Canónico* (en adelante citado como *DGDC*), II, Thomson-Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra) 2013, 283-288; E. CORECCO, «Sinodalità», en G. BARBAGLIO - S. DIANICH (eds.), *Nuovo dizionario di teologia*, Milano 1988, 1483 ss.

⁴ Cfr. A. VIANA, *El gobierno colegial en la Iglesia*, *Ius Canonicum* 36 (1996) 465-499; J. I. ARRIETA, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, Milan 1997, 124-135.

⁵ Cfr. art. 92 *Normae Romanae Rotae*, del 18 de abril 1994, AAS 86 (1994) 508-540, que establece el criterio de la mayoría absoluta de los votos del colegio como determinante de la sentencia.

⁶ Cfr. Const. dogm. *Lumen gentium*, *Nota explicativa praevia* n. 1.

⁷ Cfr. J. P. SCHOUPE, «Patrimonio eclesiástico», en *DGDC*, V, 975-979; T. MAURO, «Patrimonio eclesiástico», en *Enciclopedia giuridica*, XXII, Roma 1990; J. MIÑAMBRES, *I beni ecclesiastici: nozione, regime giuridico e potere episcopale*, en AA.Vv., *I beni temporali della Chiesa*, Roma 1999, 7-20.

⁸ «Il compito di chi è chiamato ad amministrare i beni temporali della Chiesa allo scopo di poter finalizzarli al fine spirituale corrispondente alla missione della Chiesa (...) Pur essendo diverso lo

Las decisiones relativas a la administración de bienes eclesiásticos deben, por consiguiente, sintetizar elementos heterogéneos y conllevar la obligada confrontación de conocimientos, pericias y responsabilidades distintas.

El referente inmediato de nuestro discurso serán los sujetos institucionales a los que el ordenamiento canónico encarga la administración de los bienes eclesiásticos a nivel diocesano y parroquial. Ello da idea sólo de un aspecto de la administración patrimonial, pero lo que se diga en ese contexto sirve en buena medida para las personas jurídicas públicas que no integran la organización eclesiástica, también porque la vigilancia que corresponde al Obispo pone en contacto con la administración diocesana los demás patrimonios sometidos a su jurisdicción.

Iniciaré recordando brevemente las novedades que la doctrina del Vaticano II provocó en la configuración sucesiva del patrimonio eclesiástico de esas entidades jerárquicas que después ha pasado al Código. Luego veremos la dimensión institucional que el Código ha dado a la gestión de ese patrimonio diocesano, y trataremos analizar en ese contexto la responsabilidad de los administradores y el concreto significado de la “cultura de empresa” que la comunión conlleva en la administración del patrimonio eclesiástico.

1. LAS DIRECTRICES DEL CONCILIO VATICANO II

Las bases doctrinales del actual régimen patrimonial de la Iglesia, y el fundamento de las novedades que se pusieron en práctica inmediatamente después del Concilio, están principalmente concentradas en los últimos números del decreto *Presbyterorum Ordinis*⁹. Al evocar el deber de ejemplaridad y desprendimiento personal de las riquezas materiales que deben practicar los clérigos, el n. 17 del decreto recuerda cuáles son los fines que justifican la existencia de bienes temporales en la Iglesia –los que recoge ahora el can. 1254 § 2 CIC– y qué actitud deben observar cuantos los administran. Unos números después, el decreto conciliar alude a la retribución del clero y en ese contexto recomienda decididamente el abandono del sistema benefical y la creación de un fondo común en la diócesis de cuya administración debe responder

scopo, l'amministrazione dei beni temporali deve fare i conti con il mondo reale (economico e finanziario) che ha delle sue regole, le quali non sempre sono consonanti con gli scopi religiosi» (L'Osservatore Romano, 19 dicembre 2012, 7).

⁹ Cfr. decr. *Presbyterorum Ordinis*, nn. 17, 20-21.

el Obispo coadyuvado de otros sacerdotes y laicos expertos en economía. Sobre la participación de laicos y de expertos en economía, insiste también el n. 17 del mismo decreto y el n. 10 del decreto *Apostolicam actuositatem*.

Ésta podría ser una síntesis de la doctrina del Concilio por lo que ahora interesa; una doctrina coherente, ante todo, con las enseñanzas que el Vaticano II había proclamado sobre la Iglesia particular como grupo de fieles eclesialmente estructurado en torno a su propio Pastor¹⁰; coherente también con la reforma de la disciplina de la incardinación y con la noción sacramental de presbiterio¹¹ y también en línea con la coparticipación de todos los miembros del Pueblo de Dios en la misión de la Iglesia. Conceptos todos ellos que, bajo esquemas diferentes, gravitan en torno a la idea de comunión.

De un sistema benefical, que ligaba una parte importante del patrimonio eclesiástico a oficios eclesiásticos bien determinados, se pasa en las diócesis a un fondo común, bastante más conspicuo, que debe hacer frente a las necesidades generales de la diócesis y que requiere un tipo nuevo de gestión. De una serie de patrimonios disociados, vinculados a cada uno de los sujetos titulares de los oficios respectivos —el párroco, el beneficiario, el Obispo—, se pasa a un único patrimonio resultante, cuya titularidad se atribuirá al Obispo en razón de una “causa” jurídica bien diversa de la benefical. El Obispo, que era antes beneficiario y titular de la mesa episcopal, ahora es representante jurídico de un patrimonio que es de la diócesis. Si antes se le reconocían márgenes amplios de libertad para administrar su propio beneficio, ahora la gestión del patrimonio diocesano debe hacerse del modo establecido por el derecho.

En términos de gestión, podría decirse que la nueva perspectiva comportó el paso de un tipo de administración patrimonial que, en muchos aspectos, podría tildarse de ius-privatístico y que, aun tratándose de bienes públicos, estaba en función de intereses “privados”, a un orden de categorías de gestión que es sustancialmente ius-publicístico, atento a la consecución y a la tutela de finalidades públicas.

De una perspectiva individual, si se quiere, se pasó a otra de comunión. Y eso en plena coherencia, decía, con la transformación de la estructura diocesana que dejaba atrás la imagen de un atomizado conjunto de oficios eclesiásticos, a causa de la personalidad jurídica de cada singular beneficio, y aparecía

¹⁰ Cfr. A. CATTANEO, *La Chiesa locale*, Città del Vaticano 2003; J. I. ARRIETA, «Diocesis», en *DGDC*, III, 338-344.

¹¹ Cfr. L. NAVARRO (ed.), *L'istituto dell'incardinazione. Natura e prospettive*, Milan 2006.

ahora como una estructura unitaria, la Iglesia particular, que refleja la idea de presbiterio; es decir, la comunión de ministerios que ayudan al Pastor diocesano en la atención de la porción del Pueblo de Dios que se le ha confiado.

La corrección del precedente concepto de oficio eclesiástico y de sus elementos patrimoniales y jurídicos constitutivos, que ordenó el n. 20 del *Presbyterorum Ordinis* y se plasmó durante la revisión del Código en los actuales cann. 145ss. CIC, tenía además el principal cometido de “espiritualizar” —en términos generales— el concepto de oficio; se buscaba centrar la esencia de cada oficio eclesiástico en las funciones ministeriales que le corresponden en la Iglesia, alejando a su titular de toda sospecha de intereses materiales relacionados con las masas beneficiales. Por eso, a partir de entonces, será una constante el tratar de preservar a los titulares de los oficios ministeriales de la inmediata gestión económica, protegiendo así la función sagrada que tienen asignada¹².

Por otro lado, resulta elocuente también la alusión de los textos conciliares al papel de los fieles laicos y de profesionales de la economía en la gestión patrimonial. En este campo, sin embargo, la mención de los laicos no respondía tanto a exigencias de corresponsabilidad bautismal, como sucede en otros terrenos, sino a la presunción asumida de que ellos están en mejores condiciones de aportar el tipo de conocimientos técnicos y la profesionalidad que la administración del patrimonio eclesiástico necesita, sobre todo tras las reformas que se deseaba introducir.

Superación de la atomización benefical, protección de la sacralidad del ministerio y gestión pericial del patrimonio diocesano serían, pues, algunas de las principales indicaciones que el Concilio dejó para la administración económica de la diócesis¹³.

Otros patrimonios eclesiásticos quedaron, como es natural, menos afectados por el abandono del sistema benefical. De todos modos, en mayor o menor medida, también a ellos afectará luego el régimen general de la disciplina patrimonial de la Iglesia que determinaría el Código de Derecho Canó-

¹² Cfr. O. ROBLEDA *Innovationis Concilii Vaticani II in theoria et disciplina officiis et beneficiis ecclesiasticis*, Periodica 58 (1969) 155-198 y 59 (1970) 277-314; M. PETRONCELLI, *Polemiche sulla nozione di ufficio ecclesiastico e gli insegnamenti del Concilio Vaticano II*, en AA.VV., *Liber amicorum M. Onclin*, Gembloux 1975, 301-316; J. I. ARRIETA, *Funzione pubblica e ufficio ecclesiastico*, Ius Ecclesiae 7 (1995) 91-113.

¹³ Sobre los criterios que han guiado la preparación del Libro V del Código, ver la síntesis de V. DE PAOLIS, *I Beni temporali della Chiesa*, Bologna 2011, 50-58.

nico, cuyos objetivos y aspectos de gestión están escritos en clave de comunión. La común finalidad del patrimonio de las personas jurídicas públicas los colocan bajo un sistema de vigilancia que en el nivel diocesano corresponde al Obispo y que éste debe realizar con los instrumentos que la disciplina canónica pone en sus manos.

2. LOS INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN PATRIMONIAL DE LA DIÓCESIS

A diferencia de lo que ocurre con otros organismos diocesanos que responden a precisas indicaciones del Vaticano II, el Concilio no estableció modelos institucionales nuevos para ocuparse de la gestión del patrimonio eclesial de las diócesis o de las parroquias. El Consejo presbiteral y el Consejo pastoral son corporaciones ideadas durante el debate conciliar que fueron luego perfiladas en normas post-conciliares y sancionadas definitivamente en el Código¹⁴. Las instituciones diocesanas y parroquiales de gestión patrimonial surgieron, en cambio, durante la revisión del Código, como formas técnicas de expresar las indicaciones recibidas del Concilio, a partir de los elementos institucionales de la disciplina anterior, básicamente reducida al Consejo diocesano de administración del can. 1520 CIC 17¹⁵.

En 1973 el directorio pastoral de los Obispos que publicó la Congregación para los Obispos seguía aún el esquema de administración patrimonial del Código de 1917, tanto a nivel diocesano como parroquial, y en las demás obras diocesanas. Siguiendo *Presbyterorum Ordinis*, n. 17, se hablaba además de la intervención de fieles laicos expertos en administración. En el directorio *Ecclesiae imago* se indicaba que el Obispo *una cum Consilio dioecesano*, examina los proyectos de obras, los presupuestos económicos y los planes de financiación, y adopta sus decisiones a norma del derecho¹⁶.

En cualquier caso, ya en la época en que se publicaba el directorio, los trabajos de revisión del *Codex* estaban apuntando nuevas instituciones de gestión patrimonial y distinguiendo mejor las funciones de sus componentes. El resultado de ese trabajo es ahora el Consejo diocesano de asuntos económicos

¹⁴ Cfr. principalmente, PABLO VI, m.p. *Ecclesiae Sanctae* I, nn. 15-17, del 6 agosto 1966, AAS 58 (1966) 757-787.

¹⁵ Cfr. J. I. ARRIETA, *Órganos de participación y corresponsabilidad en la Iglesia diocesana*, Ius Canonicum 68 (1994) 553-593.

¹⁶ Cfr. S. CONGREGACIÓN PARA LOS OBISPOS, dir. *Ecclesiae imago*, para el ministerio pastoral de los Obispos, Roma 22 febrero 1973, n. 135.

y el oficio de Ecónomo, a nivel diocesano, y el Consejo parroquial de asuntos económicos que prescribe el can. 537 CIC¹⁷.

Este plano institucional, no particularmente novedoso en cuanto tal, habría de estar animado, sin embargo, por la “cultura de empresa” de comunión que caracteriza al estilo propio de la organización eclesial.

Consideremos ahora algunos aspectos de la organización institucional que establece el Código para la gestión del patrimonio eclesial de la diócesis; como veremos, hay factores que, a partir de las exigencias de comunión, ayudan a individuar mejor posiciones jurídicas de los sujetos implicados y también criterios de actuación. Veamos, en primer término, cómo ha querido el Legislador configurar el Consejo diocesano de asuntos económicos, qué significado tiene su composición, y qué posiciones jurídicas se delinean entre sus miembros.

2.1. *La configuración del Consejo diocesano de asuntos económicos: la diversidad de posiciones*

La figura del Consejo diocesano de asuntos económicos apareció ya en los primeros esquemas del *coetus De Sacra Hierarchia* como organismo colectivo de dirección de la administración del patrimonio diocesano. Sería el sucesor del Consejo de administración del viejo *Codex* y debía estar formado, al menos, por tres fieles cualificados en materias económicas y derecho civil, una expresión genérica que sólo pretendía aludir a la objetiva experiencia profesional de sus miembros en materia de administración de bienes.

En la primera referencia que a él se hace, durante la VI Sesión del *coetus De Sacra Hierarchia*, en abril de 1969, el Consejo debía estar presidido por el Ecónomo¹⁸; en años sucesivos se llega a definir el actual texto del can. 492 CIC, estableciendo que sea el Obispo o un delegado suyo quien lo presida¹⁹. La rectificación refleja, de todos modos, la búsqueda de un equilibrio entre los distintos *inputs* provenientes del Concilio y manifiesta el esfuerzo por perfilar mejor las funciones de cada cual. Hay que evitar –parece sugerirse– que el ministerio pastoral del Obispo se vea empañado en la gestión patrimonial pero,

¹⁷ Cfr. J. L. MORRÁS-ETAYO, «El Consejo diocesano de asuntos económicos», en *DGDC*, II, 851-853; IDEM, «Consejo parroquial de asuntos económicos», en *DGDC*, II, cit., 589-590; J. P. SCHOUPPE, *Elementi di Diritto patrimoniale canonico*, Milano²2008, 181 ss.

¹⁸ Cfr. Communicationes 24, 1992, 53.

¹⁹ Cfr. Communicationes 24, 1992, 62.

de otro lado, su capitalidad diocesana no permite exonerarlo por completo de responsabilidades en terreno patrimonial.

De este modo se separará el cometido de dirección y control, estructurado en forma colegial, y la función directamente ejecutiva de administrar el patrimonio. La dirección corresponde al Consejo diocesano de asuntos económicos que el Obispo preside, mientras que la ejecución se confía al Ecónomo: “*ne Episcopus per se negotia gerat*”²⁰, apostillan las Actas, indicando el tipo de función que no debe ejercer. Al Obispo corresponde en razón del oficio administrar los bienes de la persona jurídica que tiene a su cargo (can. 1279 § 1 CIC), y él es el representante jurídico de la diócesis, como dice el can. 393 CIC²¹.

La reducida composición del Consejo facilita su constitución en todas las diócesis, dado que es preceptiva. Siempre cabe que el número de componentes sea superior, a condición de que ello no sea obstáculo para ejercer sus funciones. En hipótesis el número de componentes podría ser variable, pero nunca inferior a tres miembros, como ya se aclaró en 1984 a propósito del Colegio de consultores²².

La norma no excluye taxativamente que el Ecónomo figure entre los miembros del Consejo, y hay que pensar que las relaciones entre uno y otro sean fluidas propiciando el intercambio de información; pero es también cierto que la sucesiva evolución de la norma ha delineado mejor los cometidos de uno y otro, y que algunas tareas confiadas al Consejo podrían entrar en conflicto con las asignadas al Ecónomo. Una solución adecuada deberá tener presente también las circunstancias y posibilidades de cada diócesis. En línea de principio, el Ecónomo no debería ser miembro del Consejo, aunque tome parte en sus reuniones siempre que no delibere sobre materias que afectan a su función. En cambio, si las circunstancias fueran complejas, parece que la separación entre el Consejo y el oficio de Ecónomo debería ser completa.

El can. 492 § 1 CIC atribuye al Obispo la designación por libre colación de los miembros del Consejo, aunque el derecho particular puede establecer

²⁰ Cfr. Communicationes 24 (1992) 53.

²¹ Es ésta una novedad del Código de 1983, pues el can. 1653 § 1 CIC 17 indicaba al Obispo únicamente como representante legal de la iglesia catedral y del beneficio episcopal.

²² Cfr. PONTIFICIA COMISIÓN PARA LA INTERPRETACIÓN DEL CÓDIGO, *Respuesta auténtica* del 11 de julio de 1984, AAS 76 (1984) 747; cfr. M. MARCHESI, *Comentario al can. 502*, en *ComEx*, II/2, Pamplona 1997, 1167-1170; L. G. WRENN, *Authentic Interpretations on the 1983 Code*, CLSA, Washington D.C. 1993, 15-16; A. STANKIEWICZ, *Prima responsa authentica Pontificiae Commissionis codicis iuris canonici authentice interpretando*, Periodica 73 (1984) 285-292.

también que algunos de ellos pertenezcan al Consejo en razón de su oficio²³. Durante los trabajos de la séptima sesión *De Sacra Hierarchia*, en febrero de 1970, se rechazó la idea de que sus componentes fuesen elegidos por el Consejo presbiteral, o designados tras consultar a éste o al Consejo pastoral²⁴. Se quería subrayar así que su cometido no era de representación sino técnico y de participación en el gobierno del Obispo: la administración de los bienes de la diócesis pertenece al régimen de la Iglesia particular, mientras que la función consultiva del Consejo pastoral concierne únicamente la labor pastoral²⁵. Basta, por tanto, que el Obispo consulte a las personas oportunas que puedan ayudar a seleccionar convenientemente estos peritos.

Fue también contestada la idea, inicialmente aceptada²⁶, de que las Conferencias Episcopales dictaran normas sobre los términos de estos nombramientos: es una función exclusiva del Obispo diocesano²⁷. Además, a partir de la sesión XV del grupo de trabajo, en diciembre de 1974, se recuperó la condición de que habían de ser verdaderamente expertos en cuestiones económicas y en derecho civil²⁸, y tras la consulta del *Schema De Populo Dei*, fue acogida la precaución de excluir de esos cargos a parientes del Obispo²⁹.

En el caso de los fieles laicos, la designación episcopal que libremente aceptan implica, por un lado, una participación en la potestad de régimen del Obispo; y, de otro lado, comporta también una prórroga o ampliación de la jurisdicción eclesiástica que el Obispo ejercía hasta entonces sobre ellos en virtud del sacramento del Bautismo y las leyes del domicilio. La relación con el Obispo que surge ahora por pertenecer a este Consejo no es de simple dependencia laboral, es decir, de un contrato canónico sometido a la legislación civil de cada País según el can. 1290, sino que comporta una nueva relación jerárquica entre oficios eclesiásticos que, como digo, amplía la jurisdicción del Obispo sobre esos laicos en base al pacto contractual.

²³ En la diócesis de Roma, por ejemplo, además del Cardenal Vicario forman el Consejo nueve miembros más, de ellos tres son miembros *ex officio*, y se recoge expresamente la conveniencia de que por lo menos dos de los restantes componentes pertenezcan al presbiterio de Roma (VICARIATO DI ROMA, *Regolamento del Consiglio per gli Affari economici della diocesi di Roma*, del 1-IX-2010, art. 6, Rivista Diocesana di Roma [2010] 566-570).

²⁴ Cfr. Communicationes 24 (1992) 65-66.

²⁵ «*Administratio enim bonorum dioecesis pertinet ad ipsum regimen Ecclesiae particularis, dum functio consultiva Consilii pastoralis respicit tantum labores pastorales*» (Communicationes 24 [1992] 66).

²⁶ Cfr. Communicationes 24 (1992) 66.

²⁷ Cfr. Communicationes 13 (1981) 127.

²⁸ Cfr. Communicationes 25 (1993) 105.

²⁹ Cfr. Communicationes 13 (1981) 127.

Hay un nuevo sometimiento a la disciplina que el Obispo establezca, a sus legítimas directrices de gobierno y también, por consiguiente, una nueva responsabilidad que antes no existía y que, en caso de contravención, podría tener eventuales consecuencias penales canónicas.

El sucesivo can. 493 CIC aporta nuevos elementos para situar la posición del Obispo respecto de los demás componentes del Consejo diocesano de asuntos económicos: a él corresponde dar indicaciones que guíen y orienten el trabajo del Consejo mismo³⁰. La indicación se incorporó en 1980 tras la revisión del *Schema De Populo Dei*, a petición de la Conferencia episcopal alemana, y aunque es natural pensar que ello deba hacerlo siempre en conformidad con el entero cuadro institucional y jurídico que la disciplina canónica establece³¹, queda también claro el carácter de última instancia decisional que el Obispo desempeña.

2.2. *Cometidos del Consejo y sistema de trabajo en comunión*

Partamos de este punto para considerar ahora el sistema de trabajo que debe imperar en este organismo por exigencias de la comunión.

Al decir que el Obispo debe dar indicaciones al Consejo diocesano de asuntos económicos sobre su trabajo, el can. 493 reconoce que es él quien debe marcar las líneas de la gestión patrimonial, de acuerdo lógicamente con las prioridades pastorales y con los consejos técnicos que reciba. La norma le reconoce el deber de establecer directivas, y por tanto el cometido de realizar personalmente la síntesis entre los consejos técnicos que recibe para administrar bien el patrimonio y los objetivos pastorales que, como Pastor diocesano, tiene confiados y que representan una de las finalidades que justifican el patrimonio eclesiástico.

Como en los procesos matrimoniales, podría pensarse que al perito psiquiatra corresponde hablar de posibles enfermedades o límites de la capacidad psicológica del sujeto, pero que es prerrogativa del juez sacar de ahí las consecuencias en orden a la nulidad del matrimonio. Con el limitado valor que tie-

³⁰ Cfr. Comunicaciones 13 (1981) 127.

³¹ Coccopalmerio ha señalado, como es natural, la perplejidad que en este punto causaría el que el Obispo pretendiese dar directivas al Consejo sin escuchar previamente sus consejos sobre cómo administrar el patrimonio de la diócesis (cfr. F. COCCOPALMERIO, *Comentario al can. 493*, en *ComEx* II/2, Pamplona 1997, 1123).

ne la imagen, también aquí es el Pastor quien debe adoptar decisiones económicas en función de objetivos pastorales sobre la base de los datos técnicos que recibe. En este proceso deliberativo cada cual deberá estar en su propia esfera conforme a la posición jurídica que le asigna el derecho, y a ese ámbito se circunscribe la responsabilidad de cada cual. Pero, en cualquier caso, la posición del perito respecto de la decisión judicial no es la misma que la de los miembros del Consejo diocesano de asuntos económicos y el Obispo. En el caso del psiquiatra el objeto específico de la intervención es diverso del propio del juez; en el nuestro, el objeto coincide, y lo que es diversa es la posición jurídica de cada cual –consultiva o deliberativa, en la denominación usual– ante la decisión final: pero la intervención de todos forma parte del proceso decisorio, como estableció la Signatura Apostólica en los casos de intervención preceptiva del Consejo Presbiteral³².

Una Respuesta de 1985 de la entonces Pontificia Comisión para la Interpretación auténtica del Código de Derecho Canónico ayuda también a delimitar la posición jurídica del Obispo y de los otros miembros del Consejo diocesano de asuntos económicos. La Respuesta estableció que cuando por exigencia del derecho un Superior –en este caso el Obispo– necesite obtener el consenso de un determinado colegio para realizar ciertos actos, ese Superior no puede votar con los demás miembros del colegio al que pertenece y que carece de voz activa incluso para dirimir un eventual caso de paridad³³.

La Respuesta muestra nuevamente que aunque todos sean considerados, desde el punto de vista del derecho, como administradores de bienes eclesíasticos, las posiciones de cada uno en el Consejo diocesano de asuntos económicos son diversas³⁴.

La Respuesta, por otro lado, se refería al consenso, es decir, al limitado número de casos en que el derecho otorga a un colegio poder vinculante –en realidad de veto– respecto de la decisión del Superior. En la mayoría de los ca-

³² Cfr. S. T. DE LA SIGNATURA APOSTÓLICA, sent. 2188/90 CA; sent. 22036/90 CA.

³³ Cfr. PONTIFICIA COMISIÓN PARA LA INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA DEL CÓDIGO DE DERECHO CANÓNICO, *Respuesta auténtica* del 5 de julio de 1985, AAS 77 (1985) 771; cfr. M. THÉRIAULT, *Comentario al can. 127*, en *ComEx I*, Pamplona 1997, 831-834; L. G. WRENN, *Authentic Interpretations on the 1983 Code*, CLSA, Washington D.C. 1993, 19-20; F. J. URRUTIA, *Superior paritatem suffragiorum in suo consilio, de qua in can. 127, 1 dirimere non potest*, *Periodica* 76 (1987) 183-188; V. DE PAOLIS, *An possit superior religiosus suffragium ferre cum suo consilio vel suo voto dirimere paritatem sui consilii*, *Periodica* 76 (1987) 413-446.

³⁴ Cfr. J. MIÑAMBRES, «Administración de bienes», en *DGDC*, I, 203-210; V. DE PAOLIS, *I Beni temporali della Chiesa*, cit., 203-212.

sos, sin embargo, el parecer consultivo, preceptivo o no, que se pide a éste y a otros organismos colegiales no es vinculante, es sólo un consejo, si bien con toda la relevancia que tiene el consejo cuando se expresa, como debe ser siempre en la Iglesia, en un contexto de gobierno en comunión³⁵.

Éste es un particular en el que ha insistido tras el Concilio la mejor canónica y que Juan Pablo II retomaba en su carta apostólica *Novo millennio ineunte* al hablar de la actividad de los órganos consultivos en la Iglesia en un contexto de comunión: «como es sabido, [estos organismos] no se inspiran en los criterios de la democracia parlamentaria, puesto que actúan de manera consultiva y no deliberativa; sin embargo, no por ello pierden su significado e importancia. En efecto, la teología y la espiritualidad de la comunión instauran una escucha recíproca y eficaz entre Pastores y fieles manteniéndolos, por un lado, unidos *a priori* en todo lo que es esencial e impulsándolos, por otro lado, a confluir normalmente, incluso en lo opinable, hacia opciones ponderadas y compartidas»³⁶.

Desde un punto de vista jurídico, respecto del sistema consultivo de gobierno, este criterio general ha sido traducido por el can. 127 § 2, 2º CIC, cuando recomienda al Superior que, aunque no tenga ninguna obligación de seguir el parecer de su consejo, «no debe apartarse del dictamen, sobre todo si es concorde, sin una razón que, a su juicio, sea más poderosa»³⁷.

Por otro lado, la reducida composición del Consejo tiene también el cometido de poder realizar entre sus componentes un tipo de trabajo de elaboración de ideas especializadas que en un grupo asambleario no sería posible: de ahí que, como decía antes, deba también tener un límite el número de componentes del Consejo por encima de los tres que señala el Código. No es un organismo representativo, y ello incide en la naturaleza de los pareceres que, en consecuencia, deberá emitir y en su normal mecánica de trabajo.

De todo ello se siguen otras consecuencias, de las que querría señalar ahora sólo dos:

La primera, evidente, es que el Consejo diocesano de asuntos económicos no es un Consejo de administración, donde impera la mayoría de votos. Es obvio: el Consejo no puede sustituir al Obispo. Por eso, a los componentes del

³⁵ Cfr. J. I. ARRIETA, *L'attività consultiva nell'amministrazione ecclesiastica di governo*, in *Discrezionalità e discernimento nel governo della Chiesa*, Venezia 2008, 133-152.

³⁶ JUAN PABLO II, Carta ap. *Novo millennio ineunte*, cit., n. 45.

³⁷ Cfr. J. I. ARRIETA, «Función consultiva», en *DGDC*, IV, 147-153, en especial 152-153.

colegio, que conservan su responsabilidad solidaria, se les deberá reconocer también la autonomía de poder tomar distancias, si el caso lo requiere, con respecto a una decisión del Obispo, haciendo constar en Actas su discrepancia o incluso presentando la propia dimisión, si llegara el caso.

La segunda es que la votación, salvo en el caso de tener que configurar el consenso del Consejo exigido por ley, no deberá ser el modo normal de manifestar el parecer consultivo. Aparte de los riesgos de innecesaria polarización de posiciones y desarmonía que la votación comporta, y el no menor peligro de que un parecer sólo consultivo expresado mediante sufragio de un grupo ejerza sobre la decisión reservada a la persona del Obispo una presión (al menos psicológica) que el derecho no le concede, en la generalidad de los casos parece que *la normal confluencia hacia posiciones compartidas* –como se expresaba el Papa identificando el contenido de la comunión– se alcance mucho mejor a través del diálogo, y que la mejor manera de aconsejar al Obispo sea mostrándole el abanico de matices que transmite escuchar la opinión de cada miembro³⁸.

2.3. *La gestión administrativa del Ecónomo en comunión*

Si la dirección del Obispo debe ser hecha en comunión lo mismo cabe decir, como es natural, del Ecónomo en la administración directa del patrimonio diocesano.

En cierto modo su cometido es mas “autónomo” que el de los componentes del Consejo diocesano de asuntos económicos, en el sentido de que es un oficio unipersonal que no tiene que “coordinarse” con otros componentes de un colegio para llegar a soluciones. El Ecónomo debe gestionar, ejecutar, pero también debe hacerlo en comunión, en el sentido de que debe administrar los bienes de la diócesis, «bajo la autoridad del Obispo diocesano» y «de acuerdo con el modo determinado por el Consejo de asuntos económicos» (can. 494 § 3 CIC)³⁹.

El can. 494 señala al Ecónomo, dos parámetros institucionales de dependencia en su gestión: el Obispo diocesano y el Consejo diocesano de asuntos económicos. Ambos órganos diocesanos marcan las directrices de la actuación

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Cfr. M. CAMPO, «Ecónomo», en *DGCD*, III, 512-516; F. COCCOPALMERIO, *sub. c. 494*, en *ComEx*, II/2, Pamplona 2002, 1125-1135; C. BEGUS, *Diritto patrimoniale canonico*, Roma 2007, 171-173.

del Ecónomo y son también instancias que deben controlar su actuación, como también muestra la intervención necesaria del Consejo caso de remoción del Ecónomo *durante munere* (can. 494 § 2 CIC).

Parece obvio, de todos modos, que en estas circunstancias el Ecónomo manifieste su comunión sobre todo actuando en sintonía con las directrices que recibe al resolver en concreto y al moverse en la línea que le ha sido trazada. En este campo el Ecónomo encuentra márgenes de actuación en los que debe guiarse por exigencias de comunión, con criterios profesionales y con una responsabilidad de oficio que debe saber reivindicar ante todos, sobre todo en respeto de la legalidad y de la buena administración. Igual responsabilidad asume respecto de las funciones especiales que el Obispo le confíe sobre otros patrimonios en base al can. 1278 CIC.

2.4. *Comunión en la gestión del patrimonio*

Hasta aquí nos hemos ocupado principalmente de las funciones de los sujetos implicados en la gestión del patrimonio diocesano. El derecho sirve para establecer las posiciones jurídicas que corresponde a cada cual en la gestión del patrimonio, y permite identificar sus competencias y responsabilidades jurídicas: la función decisoria del Obispo, la consultiva y de control de los componentes del Consejo, y la de gestión puntual del Ecónomo. La idea de comunión, en cambio, más que al derecho dice relación al gobierno, a cómo se toman y se apoyan las decisiones. El concepto de comunión está en relación con el arte de gobernar, el arte del gobierno pastoral en este caso, pues tal debe ser la finalidad primordial de la gestión patrimonial.

Gobernar en comunión sería aquí el arte de adoptar decisiones en materia patrimonial que anticipan o previenen consecuencias, en armonía con todos los sujetos implicados. La comunión supone el concurso de esos sujetos desde la posición y perspectiva que le corresponde, aunando sus competencias; y comporta el arte de encauzar y orientar esas diversas voluntades hasta llegar a la decisión final que todas apoyan.

Gobierno en comunión comporta así la capacidad de ceder y armonizarse, no como constricción de obediencia jerárquica, sino de forma espontánea y autónoma y, por tanto, sin anular las responsabilidades individuales de quienes participan. Por eso, llegado el caso, quien entienda que no puede sostener una decisión de particular entidad, o una entera línea de decisiones, deberá probablemente adoptar medidas más radicales y tomar distancias.

El gobierno en comunión es compatible con la responsabilidad personal y con la atenta valoración de las propias responsabilidades. Aunque la decisión final sea responsabilidad del Obispo también los demás sujetos implicados en la administración y el Económico deben lealmente asumir la parte que les corresponde en ella. Juan Pablo II decía que «espiritualidad de comunión es también capacidad de ver lo que de positivo hay en el otro, para acogerlo y valorizarlo»⁴⁰.

Dado que al Obispo corresponde la decisión final, es también competencia suya encauzar el proceso de convergencia de opiniones que la comunión implica. Sin embargo, en este punto juega mucho el talante de las personas y el grado de efectiva participación en la “cultura de empresa” que la comunión significa y que determinará su personal estilo de gobierno. De todos modos, también la actitud de los demás sujetos intervinientes debe ser activa, y resulta decisiva para apoyar posiciones más inseguras, corregir algunos excesos, etc. El confronto es necesario e incluye la capacidad de generar confianza.

Todo ello confluye en el gobierno en comunión y en el respeto de las posiciones jurídicas que cada cual tiene asignadas en la gestión del patrimonio eclesiástico.

3. LA NATURALEZA JURÍDICA ESPECÍFICA DE LOS CONSEJOS ECONÓMICOS

Hablando de los nuevos organismos colectivos que el Código prescribe en la diócesis, suele ser corriente entre los autores mencionar el Consejo diocesano de asuntos económicos como uno más entre los organismos de participación y de corresponsabilidad en el gobierno, junto al Consejo presbiteral al Colegio de Consultores o al Consejo pastoral diocesano⁴¹. Es frecuente que los cuatro colegios suelen ser tratados conjuntamente, como modo de distinguir los respectivos sectores de competencia y la específica composición de cada uno.

Como estamos viendo, éste es un enfoque equivocado que, aparte de los matices que es necesario hacer para distinguir el distinto fundamento doctri-

⁴⁰ «Spiritualità di comunione è pure capacità di vedere innanzitutto ciò che di positivo c'è nell'altro, per accoglierlo e valorizzarlo come dono di Dio: un “dono per me”, oltre che per il fratello che lo ha direttamente ricevuto» (JUAN PABLO II, Carta ap. *Novo millennio ineunte*, cit., n. 43).

⁴¹ Cfr. H. MÜLLER, *Comunione ecclesiale e strutture di corresponsabilità: dal Vaticano II al Codice di diritto canonico*, en AA.VV., *Comunione ecclesiale e strutture di corresponsabilità*, Roma 1990, 32; F. DANEELS, *De dioecesis corresponsabilitatis organis*, Periodica 74 (1985) 302.

nal de cada uno, desdibuja, sobre todo, la peculiar función de gobierno del Consejo diocesano de asuntos económicos. No ha surgido, en definitiva, esta institución por exigencia de la teología del sacerdocio, para expresar la cooperación del presbiterio con su Cabeza para la dirección pastoral del Pueblo de Dios; ni es una manifestación institucional de la común responsabilidad de todos los bautizados en la misión de la Iglesia. El Consejo diocesano de asuntos económicos surge para gestionar el patrimonio diocesano del modo establecido por el Derecho, lo mismo que el oficio de Ecónomo⁴².

La sistemática del Código es clara. Dentro del capítulo II de este título del Libro II dedicado a la Curia diocesana, se sitúa la que podríamos denominar “curia económica” o “sección económica” de la Curia, bien distinta de los organismos diocesanos que aparecen luego en sucesivos capítulos. El Consejo diocesano de asuntos económicos y el oficio del Ecónomo quedan así colocados dentro de la “administración activa” de la diócesis, allí donde se habla de los Vicarios del Obispo, del Canciller o del Consejo episcopal. Se trata, pues, de un organismo diocesano que, en alguna medida, participa de la potestad conferida al Obispo, que es quien lo instituye y designa sus componentes, si bien al hacer esto sigue una prescripción taxativa del derecho universal a la que el Obispo no puede sustraerse.

En cierto modo, sucede como con el oficio de Vicario general, que es también un oficio obligatorio, con unas funciones establecidas por el derecho. El Obispo no tiene libertad de prescindir del oficio de Vicario general en la diócesis, ni puede tampoco modificar las competencias ordinarias que el Código le atribuye. Es evidente que el ordenamiento canónico quiere, de este modo, establecer ciertos límites a la potestad del Pastor diocesano: quiere que en su gobierno pastoral cuente con el Vicario general; entiende que no es prudente dejar el entero gobierno pastoral de la diócesis en manos del Obispo y, sin renunciar al principio jerárquico, establece que el Pastor se confronte con su vicario.

En lo que hace referencia a la administración patrimonial sucede algo similar⁴³. El derecho ha previsto organismos de gobierno determinados que se

⁴² Como hace notar Begus, los autores difieren a la hora de precisar mejor los cometidos del Consejo: *vid.* C. BEGUS, *Diritto patrimoniale canonico*, cit., 174, nota 69.

⁴³ «Il Vescovo non viene privato, con la nomina dell'economo, della sua potestà esecutiva che conserva ordinaria, propria ed immediata, mantenendo il potere di amministrare i beni della diocesi; tuttavia, deve affidare ad un altro soggetto alcune competenze, come avviene anche per l'esercizio del potere giudiziale» (C. BEGUS, *Diritto patrimoniale canonico*, cit., 170).

posicionan junto a los demás elementos que componen el “sistema” de gestión del patrimonio diocesano, y cada una de los sujetos que lo integran asumen deberes y responsabilidades específicos. En ese sistema al Obispo corresponden funciones de vértice y de representación jurídica, pero el derecho lo somete también a determinados parámetros.

El Consejo diocesano de asuntos económicos no es, pues, lo que suele llamarse un “organismo de corresponsabilidad”. Sus componentes asumen responsabilidades de gobierno, entitativamente diversas de las de los componentes de los organismos consultivos diocesanos, pasando a integrar el mecanismo establecido por el derecho para el gobierno del patrimonio de la diócesis.

Hay por eso un aspecto que conviene poner de relieve a este propósito. En diversas ocasiones el ordenamiento prescribe la intervención –vinculante o no– del Consejo diocesano de asuntos económicos y del Colegio de consultores antes de que el Obispo adopte una medida determinada. En estos casos parece obvio que la intervención de un organismo y de otro se mueve dentro de parámetros diferentes, y que deban también considerarse de manera diversa las dinámicas internas de un organismo y de otro, la responsabilidad jurídica de sus componentes y las actitudes que deben asumir.

El Colegio de consultores es organismo consultivo⁴⁴, exponente del Consejo presbiteral, particularmente encargado –como indica la doctrina– de preservar la identidad diocesana y la de su presbiterio, lo que comprende también una dimensión patrimonial. En cambio, el Consejo diocesano de asuntos económicos es, como decíamos, un órgano activo de la administración patrimonial, y a sus componentes se aplica la disciplina canónica sobre los administradores⁴⁵. Por tanto, cuando los dos consejos intervienen en asuntos que deben tratar, cada uno deberá emitir el propio parecer, principalmente al menos, desde la perspectiva de los intereses jurídicos que respectivamente tienen confiados. Ello excluye, parece obvio, que se celebre una reunión conjunta, al menos en los casos en que el derecho establece formalmente la intervención de cada uno de ellos.

⁴⁴ Cfr. J. I. ARRIETA, *La configuración jurídica del colegio de consultores*, Ius Canonicum 48 (1984) 783 ss.; LL. MARTÍNEZ SISTACH, *El colegio de consultores en el nuevo código*, Revista Española de Derecho Canónico 39 (1983) 291ss.; C. BEGUS, *Diritto patrimoniale canonico*, cit., 176-177.

⁴⁵ Cfr. J. P. SCHOUPPE, *Elementi di Diritto patrimoniale canonico*, cit., 147-159; V. DE PAOLIS, *L'amministrazione dei beni: soggetti a cui è demandata in via immediata e loro funzioni*, en AA.VV., *I beni temporali della Chiesa*, cit., 59-82; A. BUSO, «Administrador de bienes», en DGDC, I, 228-230.

Sobre todo quien realiza una consulta no vinculante, el Obispo, deberá saber distinguir el diverso peso de un parecer y otro en función de la posición que cada organismo ocupa en el gobierno de la diócesis y de los intereses jurídicos que tiene específicamente confiados. Si el Colegio de consultores, por ejemplo, se arriesga a dar pareceres técnicos en materia financiera, por ejemplo, está fuera de duda que el Obispo, en su labor de síntesis decisional, deberá dar prioridad en ese orden de conceptos a las razones que le hubiera señalado el Consejo diocesano de asuntos económicos⁴⁶.

Entre los principios que deben guiar la administración de los bienes de la diócesis⁴⁷, el Directorio para los Obispos de 2004 propone el que denomina “criterio de competencia pastoral y técnica” y el que llama “criterio de participación”. Son dos criterios que se sobreponen, pero que no deben confundirse, pues persiguen objetos diversos y atienden a intereses diferentes. Una lectura atenta del documento muestra que la “competencia técnica” está referida al Consejo diocesano de asuntos económicos y al Ecónomo, en sus respectivos cometidos; en cambio, la “competencia pastoral”, a nivel de decisión, queda referida al Colegio de consultores; mientras que, por último, el “criterio de participación” alude a la implicación del clero y de los fieles en general en las decisiones más relevantes, mediante una adecuada información y la oportuna mutua participación en los problemas a través de las instancias institucionales de la diócesis, que principalmente son el Consejo presbiteral y el Consejo pastoral.

El parecer de los organismos de participación es también pertinente, pero en su lugar, y es tarea del Obispo y de quien le asesore no perder de vista el contexto en que se coloca cada parecer consultivo. No sería, por ejemplo, un buen ejercicio del gobierno en comunión trasladar a un órgano de participación el cometido de hacer valoraciones técnicas que requieren adecuados conocimientos, arriesgándose a que la mecánica de actuación propia de un grupo asambleario banalice cuestiones que exigen complejas evaluaciones periciales. Esto no siempre aparece evidenciado en los documentos.

De todos modos, el riesgo de conmixtión es mayor a nivel parroquial, entre el Consejo pastoral del can. 536 CIC y el Consejo parroquial de asuntos económicos del can. 537 CIC. De hecho actualmente el Pontificio Consejo para los Textos Legislativos estudia un recurso de congruencia, en virtud del

⁴⁶ En general, sobre este punto, cfr. J. I. ARRIETA, «Función consultiva», en *DGDC*, IV, 147-153.

⁴⁷ CONGREGACIÓN PARA LOS OBISPOS, dir. *Apostolorum successores*, del 22 de febrero de 2004, n. 190.

art. 158 *Pastor bonus*, contra el Decreto general de un Obispo diocesano que establece las normas de estos consejos parroquiales. Después del Concilio, muchas diócesis del área alemana establecieron estos organismos a nivel de parroquia, sin que se hubiera preparado todavía la actual disciplina codicial⁴⁸. Por diversos motivos, promulgado el Código en 1983, la situación creada en los decenios anteriores no se acomodó a la nueva disciplina, y ahora es frecuente en muchos lugares que sólo exista un Consejo a nivel parroquial que se ocupa de cuestiones pastorales y económicas; que, además, asume la titularidad de la persona jurídica y del patrimonio parroquial, en lugar del párroco, y que, en lógica consecuencia de ello, adopta decisiones según criterios colegiales sin respetar los criterios de comunión y la peculiar posición del párroco.

⁴⁸ De hecho entre las observaciones al *schema Codicis* de 1980, figura la del card. König pidiendo establecer alguna conexión entre el Consejo parroquial de asuntos económicos y el Consejo pastoral parroquial. La Comisión responde de forma tajante: «*Nulla conexio praevidenda est, qui agitur de organis diversis*» (PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Relatio Complectens Synthesim Animadversionum ab Em. mis atque Exc. mis Patribus Commissionis ad Novissimum Schema Codicis Iuris Canonici Exhibitarum, cum responsionibus a Secretaria et Consultoribus datis, Typis Polyglottis Vaticanis*, MCMLXXXI, 127).

Bibliografía

- ARRIETA, J. I., «Diócesis», en J. OTADUY - A. VIANA - J. SEDANO (eds.), *Diccionario General de Derecho Canónico*, III, Thomson-Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra) 2013, 338-344.
- , *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, Giuffrè, Milano 1997.
- , «Función consultiva», en J. OTADUY - A. VIANA - J. SEDANO (eds.), *Diccionario General de Derecho Canónico*, IV, Thomson-Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra) 2013, 147-153 y 152-153.
- , *Funzione pubblica e ufficio ecclesiastico*, *Ius Ecclesiae* 7 (1995) 91-113.
- , *L'attività consultiva nell'amministrazione ecclesiastica di governo*, in *Discrezionalità e discernimento nel governo della Chiesa*, Venezia 2008, 133-152.
- , *Órganos de participación y corresponsabilidad en la Iglesia diocesana*, *Ius Canonicum* 68 (1994) 553-593.
- BEGUS, C., *Diritto patrimoniale canonico*, Lateran University Press, Roma 2007.
- BUSO, A., «Administrador de bienes», en J. OTADUY - A. VIANA - J. SEDANO (eds.), *Diccionario General de Derecho Canónico*, I, Thomson-Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra) 2013, 228-230.
- CAMPO, M., «Económico», en J. OTADUY - A. VIANA - J. SEDANO (eds.), *Diccionario General de Derecho Canónico*, III, Thomson-Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra) 2013, 512-516.
- CATTANEO, A., *La Chiesa locale*, Città del Vaticano 2003.
- COCCOPALMERIO, F., *Comentario al can. 493*, en *ComEx*, II/2, Pamplona 1997, 1123.
- , *sub. c. 494*, en *ComEx*, II/2, Pamplona 2002, 1125-1135.
- CORECCO, E., «Sinodalità», en G. BARBAGLIO - S. DIANICH (eds.), *Nuovo dizionario di teologia*, Edizioni Paoline, Milano 1988.
- DANEELS, F., *De dioecesanis corresponsabilitatis organis*, *Periodica* 74 (1985) 302.
- DE PAOLIS, V., *An possit superior religiosus suffragium ferre cum suo consilio vel suo voto dirimere paritatem sui consilii*, *Periodica* 76 (1987) 413-446.
- , *L'amministrazione dei beni: soggetti a cui è demandata in via immediata e loro funzioni*, en AA.VV., *I beni temporali della Chiesa*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1999.
- , *I Beni temporali della Chiesa*, Edizioni Dehoniane, Bologna 2011, 50-58 y 203-212.

- JUAN PABLO II, Carta ap. *Novo millennio ineunte*, del 6 de enero de 2001, n. 43, AAS 93 (2001) 266-309.
- MARCHESI, M., *Comentario al can. 502*, en *ComEx*, II/2, Pamplona 1997, 1167-1170.
- MARTÍNEZ SISTACH, LL., *El colegio de consultores en el nuevo código*, Revista Española de Derecho Canónico 39 (1983) 291 ss.
- , *La configuración jurídica del colegio de consultores*, Ius Canonicum 48 (1984) 783ss.
- MAURO, T., «Patrimonio ecclesiastico», en *Enciclopedia giuridica*, XXII, Roma 1990.
- MIÑAMBRES, J., «Administración de bienes», en J. OTADUY - A. VIANA - J. SEDANO (eds.), *Diccionario General de Derecho Canónico*, I, Thomson-Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra) 2013, 203-210.
- , *I beni ecclesiastici: nozione, regime giuridico e potere episcopale*, en AA.VV., *I beni temporali della Chiesa*, Roma 1999, 7-20.
- MORRÁS-ETAYO, J. L., «El Consejo diocesano de asuntos económicos», en J. OTADUY - A. VIANA - J. SEDANO (eds.), *Diccionario General de Derecho Canónico*, II, Thomson-Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra) 2013, 851-853.
- , «Consejo parroquial de asuntos económicos», en J. OTADUY - A. VIANA - J. SEDANO (eds.), *Diccionario General de Derecho Canónico*, II, Thomson-Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra) 2013, 589-590.
- MÜLLER, H., *Comunione ecclesiale e strutture di corresponsabilità: dal Vaticano II al Codice di diritto canonico*, en AA.VV., *Comunione ecclesiale e strutture di corresponsabilità*, Roma 1990, 32.
- NAVARRO, L. (ed.), *L'istituto dell'incardinazione. Natura e prospettive*, Milano 2006.
- PETRONCELLI, M., *Polemiche sulla nozione di ufficio ecclesiastico e gli insegnamenti del Concilio Vaticano II*, en AA.VV., *Liber amicorum M. Onclin*, Duculot, Gembloux 1975, 301-316.
- PONTIFICIA COMISIÓN PARA LA INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA DEL CÓDIGO DE DERECHO CANÓNICO, *Respuesta auténtica* del 5 de julio de 1985, AAS 77 (1985) 771.
- , *Respuesta auténtica* del 11 de julio de 1984, AAS 76 (1984) 74.
- ROBLEDA, O., *Innovationis Concilii Vaticani II in theoria et disciplina officiis et beneficiis ecclesiasticis*, Periodica 58 (1969) 155-198; 59 (1970) 277-314.

- SCHOUPPE, J. P., *Elementi di Diritto patrimoniale canonico*, Giuffrè, Milano 2008, 181 ss.
- , «Patrimonio eclesiástico», en J. OTADUY - A. VIANA - J. SEDANO (eds.), *Diccionario General de Derecho Canónico*, V, Thomson-Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra) 2013, 975-979.
- SEMERARO, M., «Communio», en J. OTADUY - A. VIANA - J. SEDANO (eds.), *Diccionario General de Derecho Canónico*, II, Thomson-Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra) 2013, 283-288.
- STANKIEWICZ, A., *Prima responsa authentica Pontificiae Commissionis codicis iuris canonici authentice interpretando*, Periodica 73 (1984) 285-292.
- THÉRIAULT, M., *Comentario al can. 127*, en *ComEx*, I, Pamplona 1997, 831-834.
- URRUTIA, F. J., *Superior paritatem suffragiorum in suo consilio, de qua in can. 127, 1 dirimere non potest*, Periodica 76 (1987) 183-188.
- VIANA, A., *El gobierno colegial en la Iglesia*, *Ius Canonicum* 36 (1996) 465-499.
- VICARIATO DI ROMA, *Regolamento del Consiglio per gli Affari economici della diocesi di Roma*, del 1-IX-2010, art. 6, *Rivista Diocesana di Roma* (2010) 566-570.
- WRENN, L. G., *Authentic Interpretations on the 1983 Code*, CLSA, Washington D.C. 1993, 15-16; 19-20.